



MINISTERIO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL



Nº de solicitud: 001-071033

[REDACTED] ha presentado solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El objeto de la solicitud es el siguiente:

*"A la atención del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Con amparo a la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, me gustaría solicitar las aportaciones y sus autores recibidas en el marco de la consulta pública sobre la concesión directa de una subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para la gestión del programa "UNICO Demanda Bono de Conectividad para Pequeñas y Medianas Empresas" Asimismo, siempre que sea posible, solicitaría que los datos proporcionados se me enviaran en formatos reutilizables como .pdf . Muchas gracias por adelantado, Un cordial saludo [REDACTED]"*

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual

## RESUELVE

Denegar el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por [REDACTED]  
[REDACTED], en la forma indicada a continuación:

La solicitud de información de [REDACTED] sobre los participantes en la consulta pública sobre la concesión directa de una subvención a la Cámara Oficial de Comercio de España para la gestión del programa "UNICO Demanda Bono de Conectividad para PYME" y sus aportaciones a la misma, ha de considerarse una solicitud de acceso a la información pública al amparo del derecho a la información pública reconocido a todas las personas por el art. 105 b) de la Constitución y regulado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).



MINISTERIO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL



La LTAIBG no configura el derecho de acceso a la información pública como un derecho absoluto sino sujeto a algunos límites, entre otros, los que señala en el art. 14, núm. 1, que relaciona una serie de materias en las que podría limitarse legalmente el acceso a la información. Dos de estas materias son *“los intereses económicos y comerciales”* (apdo. h) del citado precepto) y *“el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”* (apdo. j)).

En el caso de la consulta pública de “UNICO Bono PYME” una de las cuestiones planteadas se refiere expresamente a los servicios de comunicaciones incluidos en el ticket de servicios elegibles para la aplicación de las ayudas, los importes máximos subvencionables en cada uno de ellos y el importe máximo total de la subvención por segmentos de empresas. En relación con estas cuestiones, los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que han realizado aportaciones a la consulta han trasladado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), Autoridad convocante de la misma, determinados datos e informaciones sobre sus ofertas de servicios y algunas sugerencias sobre el ticket de servicios elegibles para las subvenciones que, sin duda, revelan o pueden revelar aspectos de sus estrategias comerciales que, de ser conocidos, podrían afectar a su posición en el mercado y a su política de comercialización y venta de productos y servicios. Desde este punto de vista, no hay duda de que la divulgación de esta información podría resultar lesiva para los intereses económicos y comerciales de los operadores y proveedores que han participado en la consulta y para su derecho a la propiedad intelectual e industrial.

Para la aplicación de los límites establecidos en el núm. 1, el núm. 2 del art. 14 de la LTAIBG dispone que *“la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”*. De este modo, constatado que la divulgación de la información solicitada por el [REDACTED] podría provocar un daño cierto para los intereses comerciales y otros bienes jurídicos de los operadores y proveedores de servicios participantes en la consulta (test del daño), quedaría por definir si hay en el caso algún interés público o privado superior al de los participantes que justificara la divulgación de la información aún ocasionando un perjuicio a éstos (test del interés) y de qué manera, *“justificada y proporcionada a su objeto”* debería limitarse el acceso para minimizar en lo posible el alcance de la limitación del derecho.

Respecto de la primera cuestión, no hay en este caso un interés público o privado que justifique la divulgación de la información por encima del perjuicio que la misma causaría a los intereses comerciales y a la propiedad intelectual o industrial de los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios participantes en la consulta puesto



MINISTERIO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL



que se trata de una consulta previa a la tramitación formal de una iniciativa normativa que puede tomar distinta forma en el futuro y que está destinada a recabar opiniones y criterios que pudieran ayudar a SETELECO a definir algunos aspectos de un programa de ayudas para la mejora de la conectividad digital y las comunicaciones electrónicas de las PYME incluido entre las actuaciones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Es decir, se trata de una consulta puramente informativa, de carácter técnico, que no prejuzga ni compromete el contenido de ninguna iniciativa en este mismo sentido que pudiera acometerse en el futuro ni impide la celebración de los trámites de consulta previa y audiencia pública de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que pudieran proceder en el caso de que se tramitara un proyecto normativo.

Respecto de la segunda cuestión, hay que considerar separadamente las dos informaciones solicitadas por el [REDACTED] esto es, la referida a la identidad de los participantes en la consulta, por un lado, y la referida a las aportaciones realizadas, por otro. Comenzando por la primera, hay que tener en cuenta que, siendo las telecomunicaciones un sector liberalizado con una multiplicidad de operadores y proveedores actuando en el mercado, la divulgación de la información sobre cuáles de éstos han participado en la consulta y, consecuentemente, se han interesado por las ayudas para conectividad destinadas a las PYME -que implica el conocimiento de cuáles no se han mostrado interesados-, podría suponer ya de suyo un perjuicio para su estrategia o su posición en el mercado. Y analizando la segunda, hay que considerar que las aportaciones de los participantes a la consulta son documentos completos, con un desarrollo y una estructura sistemática determinados, por lo que resulta complejo segregar los datos e informaciones que pudieran comprometer los intereses comerciales o la propiedad intelectual o industrial de sus autores de aquéllos que no lo hicieran y suprimir o "anonimizar" los primeros. En este sentido, considerando conjuntamente estos razonamientos, la aplicación los límites señalados en las letras h) y j) del núm. 1 del art. 14 de la LTAIBG a la solicitud de información pública de [REDACTED] implica la denegación total del acceso sin que sea posible matizarla o establecer excepciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

D. Arturo Azcorra Saloña.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente en cada caso





MINISTERIO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL



(Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.